



COLUMNISTA INVITADO

DR. ENRIQUE CASTAÑEDA SALDAÑA*

Perú: entre la captura del Estado y la urgencia de un nuevo pacto social

El reciente cambio de presidente no marca un nuevo comienzo para el Perú. Marca, más bien, la consolidación de una práctica peligrosa: la degradación progresiva de la política hasta convertirla en un espacio donde la ética es secundaria y el poder es un fin en sí mismo. No estamos ante una crisis coyuntural. Estamos frente a un problema estructural de captura del Estado.

La historiadora Carmen McEvoy ha descrito con crudeza el momento que vive el país: el Perú habría sido tomado por "aves de rapiña", en alusión a sectores del Congreso de la República que han vaciado la política de propósito público. La reciente elección de José María Balcázar no puede analizarse como un simple relevo interno; es la expresión de un sistema que se reproduce a sí mismo sin atender el descrédito ciudadano.

El daño más profundo no es institucional, es moral. Cuando la ciudadanía percibe que los liderazgos carecen de integridad, se erosiona el contrato social. El mensaje que se instala es devastador: la política no es servicio, es botín. La consecuencia es abstencionismo, voto emocional, radicalización y, sobre todo, apatía. Y una democracia que normaliza el cinismo comienza a vaciarse por dentro.

Mientras el sistema político se enreda en disputas de poder, los problemas reales se agravan. La juventud siente el abandono. La demora o incertidumbre en programas como Beca 18 no es un simple problema administrativo; es una señal de prioridades distorsionadas. Miles de jóvenes talentosos, especialmente de sectores vulnerables, viven en la incertidumbre sobre su futuro. En un país con brechas educativas profundas, postergar oportunidades es condenar generaciones. El costo político de este abandono será alto. Una juventud sin expectativas es terreno fértil para la frustración o la migración.

La salud pública tampoco ha sido prioridad estratégica. Tras la pandemia, el país esperaba reformas estructurales: integración del sistema, fortalecimiento del primer nivel de atención, inversión sostenida en infraestructura y talento humano. En cambio, la agenda ha sido dominada por la supervivencia política. El resultado es un Estado reactivo, no preventivo; un sistema frágil frente a nuevas crisis.

En paralelo, la inseguridad ciudadana se ha convertido en experiencia cotidiana. Extorsión, crimen organizado y violencia urbana avanzan mientras la respuesta estatal parece fragmentada. Sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay cohesión social. La inseguridad no solo es un problema policial; es una amenaza al tejido democrático.

El núcleo del problema es una crisis de valores y de incentivos institucionales. Partidos débiles, financiamiento opaco, transfuguismo y ausencia de meritocracia alimentan un círculo vicioso donde la mediocridad se normaliza. La ciudadanía termina eligiendo entre opciones cuestionadas porque el sistema no produce alternativas sólidas.

Pero resignarse sería el error más grave. Debemos reconocer que el modelo de gobernanza actual no garantiza estabilidad ni desarrollo sostenible. El país necesita reformas políticas profundas, fortalecimiento real de partidos, reglas claras de transparencia y una apuesta decidida por políticas de Estado con horizonte de 20 o 30 años.

El Perú aún cuenta con una reserva moral: en sus universidades, en sus investigadores, en sus profesionales, en sus emprendedores, en sus jóvenes que creen en el mérito y el esfuerzo. Esa reserva no puede permanecer silenciosa. Si la política formal se degrada, la sociedad civil debe elevar el estándar.

El país necesita un pacto social. No un acuerdo superficial, sino un compromiso transversal que priorice educación, salud, seguridad y lucha frontal contra la corrupción. Un pacto que establezca reglas de juego estables y metas nacionales compartidas.

***Rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia**

